
Matilde Luna y Ricardo Tirado*

Los EMPRESARIOS se deciden

Introducción

Durante el gobierno de Miguel de la Madrid la política de partidos, y en particular el debate electoral, pasa a ocupar un lugar destacado en la escena política nacional. Una de las cuestiones más importantes en esta nueva jerarquía es el deslizamiento de sectores empresariales en el espacio político partidario.

Este trabajo se propone especificar, de modo breve, los antecedentes de lo que podríamos llamar el proceso de politización empresarial, para definir después las características e implicaciones más significativas de la presencia empresarial en la política partidaria actual.

La idea central que rige este artículo es la existencia de un *desideratum* empresarial de actuar políticamente con vistas a obtener el reconocimiento del empresariado como actor político, con una presencia pública, legítima y organizada, así como con posiciones específicamente políticas que contribuyan a garantizar los mecanismos de consulta existentes, a ampliar los canales de participación empresarial en las máximas decisiones y, en general, a asegurar el ingreso a nuevos espacios político-ideológicos que sirvan de base a la promoción de su hegemonía.

Ese *desideratum* se expresa en el contexto de la refuncionalización de la reforma política lopezportillista —originalmente lanzada con una

*Investigadores adscritos al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

dedicatoria a la izquierda—, en el sentido de un incipiente bipartidismo PRI—PAN que coincide y es alimentado por el quehacer político empresarial.

Antecedentes. El empresariado como un sujeto apolítico

El pacto social surgido de la Revolución excluyó al empresariado como actor político, es por ello notable su ausencia en los partidos políticos y, en particular, en el partido oficial.

Cuando en 1938 la burocracia política —en el cenit de su hegemonía y de la “autonomía” del Estado de la revolución— reestructuró su partido para convertirlo en PRM (Partido de la Revolución Mexicana), la burguesía fue tajantemente excluida; esto contrastaba con la institucionalización de canales de expresión —así fuera en forma subordinada— de los intereses de las otras clases. Otro tanto hizo posteriormente el PRI (Partido Revolucionario Institucional), sucesor del PRM, pues aunque a través de su sector popular se han expresado siempre algunos intereses empresariales, como los de los propietarios de predios rurales que agrupa la CNPP (Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad), los de los transportistas y algunos otros grupos gremiales, el hecho es que la representación de la burguesía como clase quedó básicamente excluida del seno del partido oficial.

Es cierto que en 1939, como reacción al reformismo cardenista, la facción norteña de la burguesía encabezada por el Grupo Monterrey, alentó la fundación del PAN (Partido Acción Nacional), el cual se sumó al movimiento almazanista y se desempeñó como un partido empresarial de esa facción. Sin embargo, tal situación concluyó cuando el alemanismo liquidó lo que quedaba de los aspectos “problemáticos” del proyecto cardenista.

Con la consolidación del alemanismo la facción norteña prefirió alejarse, aunque no del todo, de ese partido que la colocaba en la oposición y negociar de manera directa con la burocracia política, como lo hacía ya otra facción de la burguesía.

Esto obedecía a que desde la consolidación del alemanismo se hizo casi inútil y a veces hasta perjudicial para los empresarios el militar abiertamente en el PAN, pues los cambios efectuados en el pacto durante esa época fueron tales, que al final no había ya casi ninguna acción oficial que hubiera que moderarse: durante el alemanismo se dio una alianza tan sólida y tan amplia entre la burocracia y los empresarios, que abarcaba prácticamente a todos los grupos y fracciones empresariales importantes, los cuales estaban unidos en torno a un pro-

yecto de desarrollo industrial y de agricultura para la exportación capaz de dar protección a todos los empresarios.

La nueva alianza era sostenida por la otra gran facción de la burguesía, la central, con sede en el Valle de México, y que por aquella época alcanzaba su madurez. Esta facción estaba, desde luego, muy alejada del PAN y aunque no militaba abiertamente en las filas del partido oficial, reconocía la hegemonía de la burocracia política llegando algunos de sus principales personeros, a integrarse al gabinete del presidente Alemán.

El partido de la derecha fue abandonado así por los empresarios norteños; grupos de intelectuales y profesionistas católicos hicieron de él, durante varias décadas, un partido de ciudadanos, de ideología de derecha más o menos extremista (según las coyunturas), cuyas bases se integraron sobre todo por profesionistas, asalariados y grupos de la pequeña burguesía propietaria, todo ellos, en general, católicos y urbanos.

En resumen, puede decirse que durante los veinte años transcurridos entre 1950 y 1970, el grueso del empresariado nacional actuó al margen de los partidos políticos, tanto del PRI como del PAN; que su acción política concreta, sobre la base de un apoyo general, implícito y difuso al PRI, fue más bien velada y desempeñada por la cúpula empresarial mediante negociaciones y presiones semisecretas con la cúpula de la burocracia política y con la aceptación pasiva o el desconocimiento de sus bases. De hecho, una regla no escrita del sistema político mexicano fue que los empresarios debían abstenerse de hacer política militante; esta regla de carácter general sería sancionada jurídicamente en relación a las organizaciones empresariales que, de acuerdo a la legislación, tienen prohibido abordar cuestiones políticas.

Fue así que la burguesía, como tal, estuvo alejada de la actividad política pública, legítima e institucional ejercida a través de los partidos políticos, y que sólo en algunas coyunturas de conflicto —por lo demás raras— actuó políticamente y como clase fundamental a través de sus organizaciones, pues éstas se comportaron, sobre todo, como grupos de presión gremialistas.

Esto no significa que los empresarios no hicieran política: la cúpula empresarial, compuesta por los representantes de las más grandes empresas y grupos económicos, así como los dirigentes de las organizaciones empresariales más relevantes, hicieron siempre política pero de manera velada, no legitimada y no institucionalizada; para ello se valieron de canales, de contactos y de “mecanismos de consulta” más o menos informales, que les daban acceso a los más importantes centros de decisión del Estado y a los más conspicuos dirigentes de la cúpula

burocrática. De esta manera, los empresarios aseguraron el ser tomados en cuenta en la elaboración de las políticas públicas y en las decisiones que de alguna manera les concernían.

La alianza entre gobierno y empresarios así construida, se recreó en las formas de la unidad burocrática. La cohesión burocrática —en gran medida producto del presidencialismo—, el alto grado de discrecionalidad que asume la toma de decisiones en la administración pública mexicana, el comportamiento patrimonialista de una facción burocrática que después de acumular grandes fortunas tendió a confundirse con la burguesía, y el privilegio de la administración estatal —en detrimento de la política de partidos— en la elaboración de las políticas públicas, todos estos elementos de la unidad burocrática, fueron en parte producto y en parte efecto del acceso de la cúpula empresarial al aparato estatal, del carácter no institucionalizado de su acción y del privilegio de una acción empresarial particularista de rango económico administrativo. La resultante de estos elementos fue la conformación de una unidad en la que lo privado y lo público tendió a diluirse.

En las fronteras de la política

El conocido conflicto entre el gobierno y los empresarios durante el gobierno de Luis Echeverría engendró un proceso de politización empresarial que, a pesar de sus profundas consecuencias, no llegó a consolidar un sujeto político empresarial en su sentido estricto, es decir, un empresariado que de manera pública, organizada y legítima, pudiera intervenir en la política partidaria.

La falta de condiciones institucionales propias a dicha forma de hacer política sin duda influyó en ello; pero cabe resaltar también tanto la incapacidad de los líderes —en particular de la facción norteña— para involucrar de manera significativa en tal empresa a sus bases, así como los problemas para llegar a un acuerdo en este sentido entre los propios dirigentes.

Sin embargo, es indudable que en el marco del fuerte conflicto político-ideológico entre el gobierno y los empresarios durante el periodo echeverrista suceden ya ciertos acontecimientos que colocan al empresariado en las fronteras de la política, de la política partidaria. Como manifestaciones de ello destacan la efusiva convocatoria de algunos líderes empresariales a hacer política y el acercamiento de los empresarios al PAN, no exento de problemas y vacilaciones.

Por otra parte, como expresión de los límites de esta tendencia, pero también como expresión de su fuerza, se encuentra a la creación

del Consejo Coordinador Empresarial, en 1975, la cual parece ser la resultante de fuerzas políticas en conflicto que pugnan, por un lado, por la constitución de un sujeto político y, por el otro, por la restitución de los tradicionales canales de consulta de carácter económico corporativo.

Fue así que en el contexto de una intensa movilización de la facción norteña por ganar posiciones de dirigencia en las organizaciones empresariales, accede a la dirección del PAN, en 1972, la corriente liderada por José Angel Conchello, muy ligada al Grupo Monterrey. 1975 representa un periodo crítico de la relación entre la clase y el partido de la derecha, cuando al poco tiempo de haber retomado la presidencia del partido otra corriente, representada entonces por Efraín González Morfín, se ve forzado a la renuncia de éste en ese mismo año.

Entre los hechos vinculados a esta dimisión, destaca la crítica del líder panista a la creación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). La dirección del partido pasa a Abel Vicencio Tovar, cercano a la corriente conchellista.

Es de mencionarse también el acceso de un presidente panista a la dirección de la Confederación Nacional Ganadera (CNG) y la constitución, con apoyo de ésta, de la Coalición Política Ganadera que criticó severamente la política agraria del régimen.

Como parte de un potencial triángulo articulado entre sectores de la Iglesia, el PAN y sectores empresariales, sobresale en este periodo la afirmación y actualización de esta vieja alianza que desde fines de 1974 se manifiesta en la acción concertada entre los empresarios y la Iglesia para construir la nueva Basílica de Guadalupe y la defensa, frente al gobierno, de la educación privada y religiosa.

Pero si bien la reacción empresarial logró, al final del sexenio, derrotar el movimiento reformista, resquebrajar la unidad de la burocracia política, desacreditar la figura presidencial e imponer condiciones al nuevo gobierno, no fue la vía partidaria la privilegiada en este proceso. Frente a la incapacidad del PAN para oponer un candidato en el relevo presidencial, destaca la fuerza del CCE y de un difuso pero muy efectivo movimiento de derecha.

Como señalamos, la fuerza y los límites de una incipiente voluntad política empresarial se manifiesta en la creación del CCE al que puede considerársele como un organismo que si bien tiene una base económico-corporativa, tiene también un fuerte sentido político, no sólo por su explícito proyecto para reorganizar la sociedad mexicana en torno a un programa neoliberal y por contraponer al corporativismo estatal un corporativismo privatista, sino también porque fue lanzado en un mo-

mento oportuno para jugar un papel importante en la decisión de la sucesión presidencial.

El CCE, un organismo cúpula que representa prácticamente a toda la burguesía urbana y a la fracción más importante de los agricultores, fue fruto de una incipiente voluntad política de la burguesía, y de la confluencia y acuerdo de sus facciones históricas más importantes: la norteña, caracterizada por su combatividad y distancia del gobierno, y la central, que se caracterizó por optar por la negociación y el entendimiento con el gobierno.

La hegemonía de la facción central en el acuerdo, se expresó en la exclusión —en los documentos del CCE— de una decisión de actuar políticamente, de manera diferente a como lo habían venido haciendo los empresarios. Un buen ejemplo de la posición de los duros es el discurso de Andrés Marcelo Sada —uno de los dirigentes del Grupo Monterrey y de la facción norteña—, quien a los pocos días que se hiciera público el CCE y su ideario señalaba que el empresariado “jamás aprendió, como lo hizo el sector sindical, el uso del poder político”, y hacía un llamado a los empresarios a ampliar su “horizonte intelectual en materia cívica y participar en los asuntos públicos donde se deciden los destinos de la sociedad...”¹

La imposición de límites al proyecto reformista y la consecuente avalancha de concesiones de todo tipo otorgadas por el gobierno de López Portillo a los empresarios, junto con la amplia disponibilidad de recursos, producto del *boom* petrolero, funcionaron como determinantes del reflujo de la politización empresarial. En estos años, las direcciones de las organizaciones empresariales son retomadas por los conciliadores.

Pero si bien la distensión domina la relación entre el gobierno y los empresarios, hay expresiones de que la incipiente voluntad política formada en el sexenio anterior no se ha disuelto totalmente.

En este sentido, son de señalarse, la demanda de empresarios poblanos al entonces candidato a la presidencia, de una cuota de diputados para los empresarios; la diputación por el PRI de Alberto Santos, prominente empresario regiomontano, con el apoyo de la Liga de Empresarios Nacionalistas, y el debate sobre la creación de un partido empresarial.

Conviene apuntar que en este periodo ninguno de esos hechos tuvo mayores implicaciones. En particular ese debate, aparece como una reacción empresarial aislada ante la reforma política.

¹ Andrés Marcelo Sada, *Dos temas para la empresa libre*. Servicio informativo Coparmex, México, 12 de mayo de 1975.

Los empresarios se deciden

La nacionalización bancaria en septiembre de 1982, al quebrantar la vieja alianza empresarios-gobierno, recrea el momento de tensión de viejos conflictos, pero también produce nuevos elementos. Es así que por una parte la reacción empresarial echa mano de probados mecanismos de presión —entre ellos la fuga de capitales, la desinversión y la agitación social— que involucran, pero también rebasan, el propio espacio de las organizaciones empresariales, y se manifiestan nuevamente diversas posiciones en el seno de la clase; por otra parte, se dibuja un *desideratum* empresarial de hacer política.

No se trata de una decisión única, acabada y coherente, que arrastre al conjunto del empresariado y excluya otros mecanismos de acción, pero es insoslayable la existencia de una decisión empresarial más o menos efectiva, que pugna por la constitución de un sujeto político.

La persistencia de una disputa sobre los términos de una nueva alianza entre el gobierno y los empresarios, a pesar de las amplias concesiones en materia de política económica, parece expresar que un acuerdo sobre esta base ya no es garantía suficiente de la representación empresarial en la toma de decisiones. De aquí el intento por consolidar un espacio específicamente político como complemento de los mecanismos de consulta existentes.

No sin problemas y contradicciones, dicha decisión de hacer política se apoya en los siguientes elementos: un intento por legitimar un cierto quehacer político en el seno de las organizaciones empresariales, un discurso antipresidencialista que tácticamente articula elementos democráticos y que, de crítica personal a los expresidentes Echeverría y López Portillo, se transforma en crítica de la propia institución presidencial, y la promoción de una acción cívica, orientada a la creación de múltiples organizaciones de todo tipo (de padres de familia, de profesionistas, religiosas, etcétera), patrocinada por el sector empresarial.

Mientras que en gran medida estos elementos implícita o explícitamente abogan por una organización de base individual o ciudadana, ellos son promovidos desde las propias organizaciones empresariales. Dos elementos críticos más de esta “estrategia” son: el intento por legitimar el carácter político de las organizaciones empresariales al mismo tiempo que se advierte sobre la “perversa politización” de los mecanismos de consulta —de base económica comparativa—, y el ataque a la discrecionalidad gubernamental, correlativo del discurso antipresidencialista, en momentos en que esta propiedad del régimen político mexicano muestra ser tan funcional, como lo ha sido en el pasado, para

negociar acuerdos sobre la forma y el contenido de la política económica. A estos problemas se suman los conflictos políticos propios de la estrategia partidaria a los que se enfrenta la decisión empresarial de actuar políticamente. Es decir, ¿hasta qué punto puede llegar la relación entre la clase y el partido? A continuación observaremos elementos y planteamientos más específicos de esta relación, aún no plenamente definida.

Por una parte y en un principio Concamín hace un llamado a sus agremiados para que como ciudadanos “en pleno uso de sus derechos políticos” canalicen su acción en la lucha por el poder a través de los partidos, aunque también intenta legitimar un cierto carácter político de las organizaciones. Por otra parte, Concanaco, y en particular la Coparmex y el CCE, se van introduciendo cada vez con mayor fuerza y agresividad en el debate político; sus dirigentes van fortaleciendo viejos nexos con el partido tradicional de la derecha, el PAN.

En los intentos por legitimar el carácter político de la participación empresarial, destaca el sofisticado discurso de Concamín basado en una distinción entre lo político (social) y la política (lucha por el poder), reservando este último tipo de acción a los partidos. Una versión menos compleja de esta misma distinción se encuentra en el siguiente texto: “las diversas organizaciones empresariales, además de sus finalidades al servicio de los particulares asociados, tienen la responsabilidad de contribuir, según su modalidad, en la promoción del bien común. Por tanto, su quehacer tiene dos dimensiones: el bien de las empresas o personas asociadas y la participación en el bien común de la sociedad. Esta participación está directamente relacionada con los ámbitos económicos y social, que a su vez por sí mismo, tienen relación con lo político”.²

Entre los aspectos más específicos de este quehacer político destacarán, meses más tarde, la fuerte crítica de Coparmex al PRI en la que se afirma que dicho partido ha sido “arrastrado por el socialismo”³ y el propósito de su máximo dirigente de constituir la organización en un cuerpo de “vigilantes cívicos para asegurar la limpieza en el proceso electoral”.⁴ Ello junto con la exaltación del régimen de Reagan como modelo para emular.⁵

Coparmex, Concanaco y el CCE, oponiéndose al presidencialismo y al monopartidismo y haciendo suyo el discurso de la renovación moral,

² *Declaración de principios de la Coparmex*. p. 23.

³ *Excélsior*, 7 de marzo de 1985.

⁴ *Excélsior*, 18 de enero de 1985.

⁵ *La Jornada*, 6 de febrero de 1985.

se pronunciarán por convertir la racionalidad técnica en una racionalidad electoral, en la práctica bipartidista.

Contrastando con el relajamiento de la presencia empresarial en el PAN durante el régimen de López Portillo y aun a pesar de los acuerdos alcanzados en materia de política económica bajo el realismo económico, destaca desde diciembre de 1982 la reactivación empresarial en el frente partidista, expresada en los debates en la Cámara de Diputados, sobre las orientaciones básicas del nuevo gobierno. El partido de la derecha se pronunció entonces en contra de la nacionalización bancaria y la rectoría del Estado en este ámbito; también, contra la reforma que eliminaba el anonimato en la tenencia de las acciones y otros títulos al portador.

A lo largo de 1983 se contempla una evidente articulación de dirigentes empresariales —en general vinculados a la facción más dura— con el PAN, un sector de la jerarquía eclesiástica y la embajada de los Estados Unidos, que se concentrará en un esfuerzo común por ganar las elecciones regionales en diversas entidades, sobre todo en el norte del país.

La articulación de estos actores se puso de manifiesto por primera vez en forma muy clara en Sonora, cuando se hizo pública la reunión de dirigentes del PAN con funcionarios de la embajada norteamericana, el obispo Carlos Quintero Arce y el empresariado local.

Más tarde, hacia mediados del mismo año, la presencia empresarial fue muy destacada en las elecciones municipales de los estados de Chihuahua (donde el PAN ganó las presidencias municipales en que habita el 70 por ciento de la población de esa entidad, con las ciudades de Chihuahua y Ciudad Juárez incluidas), Durango, Baja California, Sinaloa y Puebla.

Los propios diputados panistas, a pesar de sus reiteradas quejas por no contar con recursos económicos suficientes, reconocieron que se estaba “trabajando intensamente para obtener apoyo de los hombres de la iniciativa privada”.⁶ Por otra parte, es de hacer notar la participación directa de empresarios como candidatos panistas; entre ellos Francisco Barrios, de Chihuahua; Adalberto Rosas y Carlos Amaya, de Sonora; Eugenio Elorduy, de Mexicali y Francisco Canales Clariond, de Nuevo León. Algunos de estos candidatos han ocupado importantes cargos en las organizaciones empresariales: Barrios fue presidente del Centro Patronal del Norte; Amaya, quien anteriormente había sido diputado panista, fue vicepresidente de Coparmex, y Canales Clariond presidió la Cámara de Comercio de Monterrey, además de haber sido

⁶ *El Nacional*, 30 de julio de 1983.

vicepresidente de Concanaco. Otros dirigentes máximos de esas mismas organizaciones hicieron declaraciones públicas en el sentido de que se lanzarán, en un futuro próximo, como candidatos por el PAN a puestos de elección popular; son los casos de José Luis Coindreau, expresidente de Coparmex; Manuel J. Clouthier, expresidente de la Coparmex y el CCE, Emilio Goicoechea, expresidente de la Concanaco y José Ma. Basagoiti, expresidente de Coparmex.

Las ligas de sectores empresariales con el partido de oposición de la derecha se entrecruzan y promueven con la reactivación de la participación política de la Iglesia que, apoyándose en los empresarios, propugna una serie de modificaciones constitucionales que reconozcan a la institución religiosa un conjunto de derechos largamente reclamados. Ello con vistas al fortalecimiento general de su presencia en la sociedad mexicana.

Un momento de transparente y crucial identificación entre la iglesia, los empresarios y el PAN se produjo cuando aquélla se sumó a la reprobación de la nacionalización bancaria efectuada en septiembre de 1982.

A las acusaciones de la intervención de la iglesia en las elecciones del norte del país el secretario del episcopado mexicano solamente respondió que no hubo participación directa, ya que —según lo dicho por el arzobispo— sólo se les pidió a los fieles que votaran para que no hubiera abstencionismo; “los engaños (y) las dudas crónicas, han gestado que los mexicanos hicieran que la balanza se inclinara hacia el PAN”.⁷

En defensa de una actuación “por el bien común”, la iglesia jerárquica ha venido apoyando cada vez más las tesis de la derecha promovidas en gran medida por el sector empresarial.⁸ El ámbito de su oposición se ha ampliado y ha venido apuntando a la desacreditación no sólo de la izquierda, como siempre lo hizo, pues ahora también abarca, en parte, al PRI y al autoritarismo del gobierno. Así, por ejemplo, en declarado apoyo al PAN, aunque advirtiendo que no hay que confundir entre partidos e iglesia, las autoridades eclesiásticas de Puebla emitieron mensajes por la radio haciendo un llamado a la población para “no votar por ideologías materialistas”, entre las cuales se incluía la del PRI.⁹ En igual sentido se pronunció el obispo Quintero Arce de Hermosillo.¹⁰

La reactivación de las ligas empresariales con el PAN alcanzó otro

⁷ *Excelsior*, 22 de julio de 1983.

⁸ Véase Roger Bartra, “Viaje al centro de la derecha”. En *Nexos*, No. 64.

⁹ *unomásuno*, 27 de noviembre de 1983.

¹⁰ *El día*, 4 de marzo de 1985.

máximo cuando en los primeros meses de 1984 —después de un proceso de confrontación de diversas líneas al interior del partido—, ganó la dirección nacional del partido Pablo Emilio Madero, quien ha mantenido una clara vinculación con la facción norteña de la burguesía.

Sin embargo, el proceso de identificación entre la clase y el partido acarrea problemas. Expresiones de ello son las reticencias de destacados panistas a la identificación plena de su partido con los intereses inmediatistas de los empresarios, las discusiones en torno a la plataforma electoral 1985-1988 y la nominación de candidatos a diputados federales por las circunscripciones plurinominales.

Al respecto, son de mencionarse las declaraciones de dos destacadas figuras del panismo histórico, uno de ellos, Manuel González Hinojosa, dos veces jefe nacional del partido, dos veces diputado federal y, durante once años, líder regional panista en San Luis Potosí; el otro, Fernando González Schmall, exdirigente del PAN y ahora integrante del grupo Solidarista que renunció a su militancia panista y encabeza el exdirigente nacional y excandidato a la presidencia de la República, Efraín González Morfín. Ambas personalidades coincidieron en señalar que los empresarios, con la venia del actual presidente del PAN, Pablo Emilio Madero, pretenden adueñarse del partido, utilizando a sus bases tradicionales para sus propios fines inmediatos.¹¹

En cuanto a las discusiones en el seno de la XXXIV asamblea panista resaltó, por una parte, el intenso debate en torno a la relación entre trabajo y capital, en el cual se produjeron dos posiciones: una, la de los impugnadores, expresada sobre todo por panistas regiomontanos que explícitamente se proclamaron representantes de tesis empresariales y, otra, la defendida por el yucateco Carlos Castillo Peraza y a la postre ganadora, que establece la subordinación del capital al trabajo. De otro lado, fue también significativo que en las listas de candidatos a diputados plurinominales, aprobada por la asamblea, no apareciera ninguno de los exdirigentes de las grandes organizaciones empresariales.¹²

Todo lo anterior es, sin duda, significativo de la aún fuerte presencia dentro del PAN, de un núcleo histórico que a pesar de todo se resiste a entregar su partido a los empresarios y lucha por recuperar su dirección.

De cualquier manera, la presencia empresarial en el PAN parece importante, y si no se hizo transparente a través de las candidaturas plurinominales de prominentes dirigentes empresariales, sí se manifestó

¹¹ Véase *La Jornada*, 14, 15 y 16 de febrero de 1985.

¹² *La Jornada*, 25 de febrero de 1985.

de modo menos ruidoso en las candidaturas uninominales de líderes empresariales regionales, además de que algunos máximos exdirigentes nacionales como Clouthier, Goicoechea y Coindreau fueron reservados para la contienda electoral por la gubernatura de Sinaloa los dos primeros, y para la alcaldía de Monterrey el tercero.¹³ Desde luego, las amplias coincidencias entre el programa del PAN y las tesis empresariales, así como la homogeneidad de las posiciones asumidas en relación a determinados problemas muestran también los vínculos entre ese partido y el empresariado.

Este panorama de la ofensiva política empresarial por la vía del PAN, sería unilateral e incompleto si no se considerara también la acción política que los empresarios han desplegado a través del PRI.

Con motivo de la XII Asamblea Nacional del PRI celebrada del 23 al 26 de agosto de 1984, se hizo transparente la acción política de la facción conciliadora al tratar de consolidar, por primera vez, un cuarto sector afiliado al partido oficial: el empresarial.

Si bien el PRI siempre ha admitido en su seno a empresarios individuales —a los que a veces se les exige se declaren “nacionalistas”— e inclusive la CNOP afilia a diversas organizaciones representativas de empresarios y propietarios (la CNPP, la Alianza de Camioneros de México, la Confederación Nacional de Autotransportistas y algunos otros organismos de pequeños comerciantes e industriales), lo nuevo ahora es que se habla de un cuarto sector del PRI que daría a los empresarios una presencia organizada corporativamente, permanente y pública dentro del partido y del régimen político mexicano.

En este sentido se pronunció la Canacina cuando, por boca de sus dirigentes, manifestó que sería adecuado el mencionado sector empresarial del PRI, ya que “propiciaría una competencia que redundaría en una superación del ejercicio gubernamental”.¹⁴

Al respecto, la Concamin externó su posición que también aprobaba —aunque de manera no tan abierta— el ingreso de los empresarios al PRI.¹⁵

Sin embargo, el asunto no fue ni siquiera discutido en el seno de la asamblea priísta, debido, ante todo, a la oposición de la burocracia sindical. De ese modo la participación empresarial en el PRI permaneció en los mismos términos de siempre, es decir, fundamentalmente a título individual.

¹³ Véase las declaraciones de Jorge del Rincón, jefe regional panista en Sinaloa y concesionario de la Ford en Culiacán, *La Jornada*, 16 de febrero de 1985.

¹⁴ *unomásuno*, julio 3 de 1984 y *El Universal*, 5 de julio de 1984.

¹⁵ *Excélsior*, 26 de agosto de 1984.

Reveladora de esta problemática fue la declaración de Martínez Gómez, expresidente de Canacintra, quien “como empresario” afirmó que “el PRI no es fórmula agotada”.¹⁶

En resumen, los empresarios aparecen ahora como un nuevo sujeto dotado de una voluntad en busca de garantías políticas. Esta nueva voluntad política es común a ambas facciones empresariales que actúan por la vía de los partidos, a través del PAN muy claramente los duros, y del PRI, de manera velada los conciliadores.

Por último anotaremos que el fortalecimiento del PAN parece contar con algunas simpatías de sectores minoritarios dentro del gobierno, especialmente en la tecnocracia, pues juzgan que el reconocer algunos triunfos electorales a ese partido redundaría en una mayor legitimidad para el gobierno, su partido y sus políticas.

¹⁶ *Excélsior*, 11 de febrero de 1985.